

H. Montero. MADRID

Las grandes crisis económicas se cocinan a fuego lento con recetas que combinan errores políticos, pizcas de movimientos temerarios y puñados de excesos a ojo, sin medir. Mientras las decisiones regulatorias se retrasan, las inversiones se congelan y las fábricas comienzan a apagar máquinas. Eso es lo que, según advierte el sector industrial, está ocurriendo ahora mismo con las grandes factorías consumidoras de energía a granel, en particular la cogeneración, impactadas además por la situación enfebrecida en los mercados de materias primas e hidrocarburos por el conflicto entre EE UU e Israel contra el régimen teocrático de los ayatolás iraníes. Esta asfixia se traduce en que más de 200 industrias –la mayoría grandes exportadoras, buques insignia de sus sectores y intensivas en mano de obra, inversión y tecnología– podrían quedar en situación crítica si no se desbloquea de forma urgente el marco que permita renovar y mantener una tecnología energética que durante décadas ha sido clave para la competitividad de buena parte del tejido productivo del país.

La alarma la ha lanzado la Asociación Española de Cogeneración (Acogen), que habla abiertamente de riesgo de «cogenicidio» industrial. El término refleja las cifras que maneja el sector y que dibujan un escenario preocupante. Más de 120 plantas industriales han cesado su actividad en los últimos años después de agotar la vida útil regulada de sus instalaciones de cogeneración, mientras que otras 90 podrían seguir el mismo camino antes de 2029 si no se habilita una solución transitoria que permita mantenerlas operativas hasta que lleguen nuevas inversiones.

Detrás de este problema no hay una caída repentina de la demanda ni una crisis de mercado, ni siquiera por la situación de alerta del comercio marítimo por el bloqueo del Estrecho de Ormuz. El bloqueo en este caso es regulatorio y se arrastra desde hace años.

La cogeneración permite producir simultáneamente electricidad y calor industrial, una combinación imprescindible para numerosos procesos productivos. Gracias

SOS de la industria española: 200 fábricas en riesgo por el bloqueo de la energía

► La crisis de Ormuz, el retraso regulatorio y los recortes propuestos a la cogeneración amenazan inversiones de 1.300 millones

a esta tecnología, las fábricas pueden aprovechar la energía de forma mucho más eficiente, reduciendo costes y emisiones. Sectores tan diversos como la cerámica, la industria química, el papel, la alimentación o la siderurgia dependen en gran medida de este sistema para mantener su actividad en condiciones competitivas.

En conjunto, las industrias que utilizan cogeneración representan aproximadamente una quinta parte del PIB industrial español y sostienen más de 200.000 empleos directos. Sin embargo, la aportación de esta tecnología al sistema eléctrico nacional se ha reducido prácticamente a la mitad en apenas cinco años. El motivo principal es la falta de un marco estable que permita renovar las instalaciones actuales, muchas de las cuales fueron construidas hace décadas y han ido agotando progresivamente su vida útil regulada.

El Gobierno tiene sobre la mesa una de las claves para resolver el problema: la convocatoria de subastas para desarrollar 1.200 megavatios de nueva cogeneración

previstos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima.

Estas subastas deberían haber llegado hace tiempo, pero acumulan retrasos desde 2022. Sobre el papel, la decisión podría producirse en los próximos meses, ya que el principal obstáculo administrativo se ha superado. La Comisión Europea ha dado luz verde al régimen español de ayudas a la cogeneración, considerándolo necesario y adecuado para reforzar la eficiencia energética y la competitividad industrial.

Ese aval europeo despeja las dudas legales que durante años han paralizado el proceso. Aun así, la incertidumbre persiste porque el sector teme que el diseño final de las subastas incluya condiciones más restrictivas que las existentes en otros países europeos. Más de 80 empresas han manifestado ya su interés en participar con proyectos que sumarían 1.200 megavatios de potencia y movilizarían alrededor de 1.300 millones de euros en inversiones. Pero esas inversiones podrían evaporarse si el marco regulatorio introduce nuevas exigencias que hagan inviables muchos de los proyectos previstos.

El debate se centra en aspectos técnicos que, sin embargo, tienen un gran impacto económico. Entre ellos figura la posibilidad de mantener libertad para vender la electricidad generada y la necesidad de conservar criterios de eficiencia alineados con la normativa europea. Si España decide imponer requisitos adicionales o restricciones más severas que las aplicadas en otros países, el resultado podría ser paradójico: menos empresas dispuestas a acudir a las subastas y menos inversión industrial.

La preocupación del sector se entiende mejor si se observa lo que ocurre en el resto de Europa. Países como Alemania, Italia o Polonia están reforzando instrumentos para proteger la competitividad energética de sus industrias en un momento en el que la transición energética y las tensiones geopolíticas han disparado los costes de producción. Cualquier diferencia regulatoria puede convertirse en decisiva a la hora de decidir dónde invertir y dónde producir.

El impacto potencial del bloqueo ya empieza a percibirse en algunos territorios industriales clave. Uno de los casos más representativos es el de la industria cerámi-



ca de Castellón, uno de los mayores polos mundiales de producción de azulejos. El sector lleva décadas utilizando cogeneración para optimizar su consumo energético y mantener su posición global. En la provincia funcionan 28 plantas de este tipo vinculadas directamente a la fabricación de cerámica.

La patronal del sector, Ascer, advierte de que el nuevo sistema retributivo planteado por el Ministerio para la Transición Ecológica para el periodo 2026-2031 podría tener un duro impacto. Según sus cálculos, la propuesta implicaría una reducción de unos 30 millones de euros anuales en la retribución de la cogeneración, lo que equivale a un recorte cercano al 37,5% respecto al escenario actual.

En un sector intensivo en ener-



EFE

gía que todavía se está recuperando de la crisis de precios del gas previa a la que ya se está cocinando si persiste la tensión en Ormuz, ese ajuste podría dificultar el mantenimiento de una tecnología clave para su competitividad.

Las consecuencias no se limitarían al azulejo. Numerosas compañías industriales han tenido que reducir producción o realizar paradas temporales en los últimos años debido al aumento de los costes energéticos y a la falta de un marco regulatorio estable. Entre ellas figuran grandes grupos industriales vinculados al acero, la metalurgia o el papel. A esta situación se suman las industrias electrointensivas, que también han frenado inversiones o ejecutado paradas intermitentes ante la in-

certidumbre energética.

A todos estos factores se añade un problema adicional que complica aún más el calendario de la transición industrial: el tiempo necesario para fabricar e instalar las nuevas plantas de cogeneración.

Los equipos fundamentales para estas instalaciones –turbinas y motores industriales– se encuentran sometidos a una fuerte presión de demanda a escala global. La expansión de los centros de datos, el aumento de los pedidos en sectores como la defensa y la recuperación de la industria aeronáutica han disparado los encargos.

Como consecuencia, los plazos de entrega se han alargado considerablemente y en algunos casos ya alcanzan los cuatro o cinco años. Esto significa que incluso si

Las industrias electrointensivas han ejecutado paradas ante la crisis energética

Los plazos de entrega de los equipos para renovar o instalar plantas alcanzan los cuatro o cinco años

Las industrias electrointensivas también han frenado inversiones y realizado paradas

las subastas se convocan finalmente durante este año 2026, muchas de las nuevas plantas no entrarían en funcionamiento hasta el final de la década. El sector advierte de que ese desfase temporal puede generar un vacío industrial si no se permite que las instalaciones actuales sigan operando de forma transitoria.

Por eso una de las principales peticiones de las empresas consiste en habilitar una prórroga que permita mantener operativas las plantas existentes hasta 2029. El objetivo sería evitar que las fábricas tengan que detener su actividad antes de poder modernizar sus sistemas energéticos. En otras palabras, mantener viva la industria durante el periodo de transición.

Bruselas ha insistido en que la

transición energética debe reforzar la competitividad del continente. Desde esa perspectiva, la cogeneración se considera una tecnología que puede mejorar la eficiencia energética y facilitar la integración de las renovables.

El sector calcula que, en condiciones óptimas, podrían movilizarse más de 1.400 millones de euros en inversiones para renovar las instalaciones existentes e incorporar tecnologías más eficientes y flexibles. Muchas de ellas podrían integrarse con energías renovables, biogás o incluso hidrógeno, hacia una industria más limpia.

Cuando una fábrica apaga sus hornos o sus líneas de producción, rara vez vuelve a encenderlos y con ello la industria española se extingue también a fuego lento.